

# EL SALVADOR: TRANSICION POLITICA Y DETERIORO SOCIAL

Italo López Vallecillos

## RESUMEN

*El autor describe y analiza los hechos sobresalientes ocurridos en El Salvador de fines de abril de 1982 a mayo de 1983, caracterizando el período como de transición política y de deterioro social. Para explicar las causas del fracaso de la fórmula "guerra más elecciones", ubica la crisis del país en el marco de una estructura social obsoleta, cuya expresión real es la pérdida de liderazgo y hegemonía de la clase dominante. Sostiene que, sin un cambio real en la conformidad del poder, la salida electoral es utópica, formal, y no resuelve la crisis del sistema. El apoyo norteamericano al bloque en el gobierno, en particular a la F.A., es cada vez mayor, al grado que el factor externo decide las cuestiones fundamentales de la guerra y la paz. Las fuerzas insurgentes FDR/FMLN continúan su esquema de negociaciones y guerra, en una confrontación verificable no solo contra el ejército del país, sino contra la política militar de EE.UU., en el área centroamericana. La guerra interna, según el artículo, es el elemento determinante del proceso en una perspectiva de regionalización a corto plazo.*

## Introducción

La situación política de El Salvador de abril de 1982 a junio de 1983 no puede juzgarse únicamente en base al resultado electoral del 28 de marzo de 1982 y a las distintas alianzas y recomposiciones de los grupos que constituyen actualmente el bloque de poder. Hay que englobar la actuación de la Asamblea Constituyente en el esquema de las presiones político-militares internas y externas, en el curso de una guerra civil que tiende a prolongarse y en el obligado marco de una crisis de hegemonía de la clase dominante del país. De ahí la necesidad de ponderar hechos, circunstancias y factores, que son determinantes del proceso en el período de estudio y en las expresiones de solución que han fracasado hasta el momento.

## 1. Guerra más elecciones, el camino equivocado

En una situación insurreccional en la que están claramente identificados los sujetos del conflicto, es difícil resolver las diferencias por la vía electoral. Eso quedó demostrado a lo largo de 1982, en que se convocó a elecciones, se llevaron a cabo y se eligieron representantes para conformar la Asamblea Constituyente. Los hechos muestran que tal tesis es improcedente, mientras las fuerzas en pugna no deliberen y acuerden las reglas del proceso político. En el caso de El Salvador se ha ignorado que la lucha es expresión insurgente de la clase dominada, frente a condiciones económicas y sociales intolerables.

La tesis electoral, por parte del bloque en el poder del Estado, podrá servir para legitimar brevemente la guerra contra los insurgentes, pero

no toca el fondo de la cuestión por la cual se han alzado determinados grupos sociales contra el régimen establecido. La causa original y objetiva del levantamiento que favorece la agitación, la organización y la acción de los revolucionarios, es evadida con procedimientos y mecanismos políticos apropiados para un momento normal. La fórmula de guerra civil, intervención norteamericana y elecciones, no sólo fue incorrecta en 1982, sino peligrosa, en tanto a corto plazo agravó las condiciones subjetivas del país.

Nuestro análisis, a fines de 1981 y principios de 1982, definió que el llamado a votar, sin la participación de las izquierdas, era una propuesta de solución formal entre las derechas y para las derechas. Con el término "derecha" caracterizamos a grupos, sectores y partidos políticos que se niegan a reconocer la necesidad de transformar la realidad económica, social política y militar de El Salvador, en forma integral. El concepto, "derecha" desde luego, es antojadizo y se presta a polémica. Para fines pedagógicos, no obstante, la simplificación puede servir para establecer que en la derecha salvadoreña se dan todos los matices, desde los populistas a la manera de José Napoleón Duarte (neutralizados por las circunstancias), a los intransigentes y enemigos a ultranza de todo cambio, núcleos que se descubren con facilidad en organizaciones conservadoras y retrógradas.

Las elecciones de marzo de 1982 en el contexto de guerra, fueron para el centro-derecha una manera de consolidar el poder a favor de la estabilidad nacional. Una forma de transacción entre el reformismo moderado de la DC/F.A. y quienes buscaban detenerlo. Para la derecha liberal y para la derecha extrema, un medio para desplazar a los "transformistas" del gobierno y la posibilidad de liquidar los tibios cambios, introducidos a partir del 15 de octubre de 1979.

El atraso político del país llenó de entusiasmo el año pasado a muchísimas personas respecto a una salida, avalada por "elecciones verdaderamente libres". Las primeras en cincuenta años, se dijo, que serían limpias, honestas y que, además, constituirían la solución del problema. Muchas veces nos preguntamos, si la derecha creía de verdad en la tesis teóricamente aceptable de dirimir las diferencias a través del sufragio, o si sólo se trataba de ganar tiempo para derrotar a las guerrillas en el campo de batalla. Llegamos, incluso, a aceptar en febrero de 1982 que la modalidad propuesta podría ser el comienzo del fin, si quienes obtenían el gobierno se decidían, desde

una posición democrática, a negociar una recomposición de fuerzas al interior de la sociedad y el Estado.

Está comprobado, por medio de sondeos de opinión, que muchos votantes pensaron que si bien las elecciones no eran la solución real, por lo menos abrían una puerta a la esperanza en el sentido de que, luego de los comicios, vendría la pacificación, la democratización y la reconstrucción nacional. Todo dependería, en este caso, del grado de madurez de los partidos y los líderes. Se partía del supuesto de que las elecciones serían un elemento humanizador y racionalizador de la guerra, frente a las izquierdas alzadas en armas.

Contribuyó a crear ese clima la propaganda del Consejo Central de Elecciones que, con un voluntarismo sorprendente, expresó que en sus manos estaba el arreglo político de las fuerzas en contienda. La prensa, radio y televisión, se encadenaron para convencer al pueblo que los comicios eran la oportunidad histórica de terminar con el conflicto. La reiterada apelación a la izquierda política y a la izquierda armada para que se presentasen pacíficamente a elecciones, demostró que la tesis era utópica e irreal. ¿Cómo podía concebirse que los grupos guerrilleros, parte importante del problema, dejarían sus propios proyectos para entrar en el juego de las derechas, sin antes definir las reglas del esquema propuesto?

El ánimo de las masas hacia las elecciones se preparó en la línea de que "el voto era la solución". Se habló de una paz, a corto plazo, ofertada por todos los partidos de derecha, incluyendo a los pro-oligárquicos. La retórica política liberal, el electorismo, la fraseología patriótica y nacionalista, se impuso con su secuela de personalismo, enfermedad característica de la política latinoamericana.

La lucha por el poder, el debate político-social, tenía en las acciones militares de la FA y el FMLN la expresión real del conflicto. La confrontación al margen de las elecciones, siguió con el mismo empuje, la misma tónica, en su equilibrio inestable, en un impasse de muerte y destrucción, con expectativas a mediano y largo plazo favorables a la solución militar.

## 2. La asesoría político-militar de EE.UU. en El Salvador

La tesis electoral fue anunciada por el Ing. José Napoleón Duarte, Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el 15 de octubre de

1981. Las presiones que sufría su partido demócrata cristiano, de parte de algunos sectores militares y de grupos económicos, coincidía con la línea adoptada por el Departamento de Estado para El Salvador: derivar el problema político-militar a la esfera de la contienda electoral.

Los expertos norteamericanos aconsejaron a la FA y a la DC, sus principales aliados en las reformas y en la lucha contra las guerrillas, que deberían "legitimar" su poder por medio de las elecciones. El pacto de la FA con la Democracia Cristiana del 9 de enero de 1980, se había agotado a mediados de 1981. Los cambios ofrecidos por el ejército en la Proclama del 15 de octubre de 1979 se concretaron tibiamente en la reforma agraria (Decreto 153 del 6 de marzo de 1980); reforma bancaria (Decreto 158 del 6 de marzo de 1980); y en la nacionalización del comercio exterior (Decreto del 2 de enero de 1980), pero la carencia de una sólida voluntad política de llevar adelante los cambios con el apoyo popular, derivó a una derechización del proyecto. A ello hay

que agregar que la FA en su intento reformista se vio acosada por el gran capital y sus capas gerenciales y por la izquierda armada que, frente al nuevo modelo reformista, presentó el suyo propio, más allá de lo que el ejército y los demócrata cristianos pretendían hacer.

Fueron las presiones reales de las fuerzas sociales las que obligaron a los EE.UU., a presentar como alternativa la solución electoral. Una forma concreta de quitar del gobierno a los reformistas o, si el consenso público "legitimaba" a la DC, de apoyar los cambios. La ambigüedad de los norteamericanos quedó en evidencia, luego del ascenso de Reagan a la Casa Blanca en 1981. Gran responsabilidad de lo ocurrido en el pasado y de lo que ocurre en el presente debate, se debe a las iniciativas estadounidenses en El Salvador. La intervención no ha sido en una sola dirección.

En la década del 60 al 70 los funcionarios de la embajada de EE.UU. en San Salvador se esforzaban por darle un sentido democrático al sis-



**La tesis electoral podrá servir para legitimar brevemente la guerra contra los insurgentes, pero no toca el fondo de la cuestión por la cual se han alzado determinados grupos sociales contra el régimen establecido.**

tema político, optaban por una apertura que permitiera el libre juego de las ideas, los grupos y los partidos. Un ejemplo de esa actuación fue la del embajador Murat Williams, quien se acercó a sectores universitarios y sindicales en busca de soporte a la "Alianza para el progreso" que el primer Kennedy había expuesto como una fórmula desarrollista en América Latina. Del 70 al 80 la política exterior de EE.UU. hacia El Salvador ha sido catastrófica, en especial en lo que se refiere a ocultar la trasgresión a las leyes y convenios internacionales por parte de gobiernos aparentemente "fuertes", gobiernos que crearon cárceles clandestinas, hicieron desaparecer a muchos ciudadanos, pretextando combatir al comunismo. En esta última década ha habido incoherencia del factor externo frente a los problemas político-militares. Es claro que también EE.UU. ha sufrido ese zigzageo, de Nixon a Ford, de Ford a Carter y de Carter a Reagan. Nunca ha sido tan cierto aquello de que si en Washington hay catarro, en El Salvador hay pulmonía.

Desde luego, sería infantil echar la culpa a los norteamericanos de todo lo que ocurre en el país. La responsabilidad de estos veinte años hay que buscarla en los grupos económicos, agrarios e industriales, incapaces de atender la reproducción ampliada del sistema, incompetentes para crear el empleo que la población demanda y pocos "salvadoreños" a la hora de invertir y reinvertir, en la proporción que reclama la economía precapitalista del país. A unas capas dominantes les cae más la culpa que a otras, y en esto no cuestionamos el "espíritu empresarial", sino el modelo económico en que operan, es decir, la obsolescencia de modos y relaciones de producción. También cabe señalar responsabilidad a la F.A. y a sus aliados políticos circunstanciales, a los altos jefes militares por no saberse retirar a tiempo a sus cuarteles, único lugar e instancia desde la cual deben actuar. No es posible que el ejército siga autodestruyéndose en el vaiven de la política. La FA no es una organización política, de su seno deben salir únicamente profesionales de las armas, hombres al servicio de la República y la democracia. Es mucho tiempo, de 1932 a 1983, éstar al frente del poder ejecutivo y, desde luego, de casi todo el aparato burocrático del Estado. El ejército en la crisis que padecemos, juega un papel, pero a futuro debe dejar que sean las propias fuerzas sociales y políticas las que disputen en el terreno que les es específico.

Reiteramos que las señales difusas de Washington, de 1979 a 1983, han alentado la lucha interna en El Salvador, pues tanto la derecha como la ultra derecha se han sentido con espacio suficiente para discutir los márgenes de las reformas, imponiendo criterios en una situación volátil, olvidándose de la raíz social del conflicto y de que la izquierda y la ultra izquierda conforman un bloque consistente desde abril de 1980.

No deben extrañarse los norteamericanos de los resultados obtenidos, a nivel de guerra y elecciones, pues éstos son frutos de una política dubitativa, débil y contemporalizadora con la ultra derecha.

Para crear condiciones de credibilidad al proceso de reformas con represión, los EE.UU. han apelado a la fórmula electoral sin darse cuenta que mientras los cambios no se institucionalicen, la estructura real de poder volverá una comedia la consulta electoral. Así ocurrió en marzo de 1982 y así ocurrirá en 1984.

Es prematuro consignar la composición de grupos y sectores políticos que se presentarán a las elecciones a fines de 1983 o principios de 1984. En lo que toca a marzo de 1982 es evidente que la lucha se dió sólo entre miembros de un mismo espectro y que la ausencia de la izquierda moderada (MNR), del UDN y de otros partidos de mayor radicalismo, fue la falla principal del evento, cuando no su fracaso. Estos partidos explicaron entonces que no había condiciones para los opositores al régimen político y al sistema económico, y en consecuencia no se presentaron al escenario electoral.

### **3. La iniciativa electoral, sin cambiar la estructura de poder**

Desde mayo de 1981 los grupos adversos al proyecto reformista militar del 15 de octubre comenzaron a presionar para que se convocara a elecciones de constituyente. El argumento principal era que las reformas se estaban haciendo al margen de la Carta Magna de 1962 y había que retornar a un Estado de derecho.

Puede afirmarse que las presiones por la vía electoral se hicieron sentir con fuerza en 1981; pero, desde antes, cuando se decretaron los cambios en 1980, los sectores golpeados por las transformaciones buscaron otros medios para neutralizar, e incluso, botar a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Presente estuvo durante dos años

la posibilidad de un golpe militar de extrema derecha. Al no lograrlo, fue que insistieron en los comicios para constituyente.

No cabe duda que las recomposiciones en la cúpula de la Junta Revolucionaria de Gobierno, fueron hechas a instancia y presión de personas y grupos sobre los mandos del ejército. Si el golpe del 15 de octubre llamó a los líderes civiles de la UNO y del FORO POPULAR a integrar un gobierno revolucionario, no fue en razón de simpatías, sino en razón de necesidades políticas. La base del movimiento militar de octubre buscaba un reencuentro con la oposición que, por veinte años, venía exigiendo cambios estructurales, autodeterminación y soberanía popular, democracia plural y representativa. Bien sabían los jefes del golpe militar que la composición de la primera junta tenía que efectuarse con la izquierda moderada, es decir, con aquel sector realmente interesado en la reforma social y política del país. Los líderes del golpe octubrista también previeron un encuentro con la iglesia representada por Mons. Romero, tanto para evitar el choque Estado/Iglesia, cuanto por asimilar en el programa de reformas las reivindicaciones de los sectores proletarios rurales y urbanos. La prueba de esta afirmación es que antes de producir el cuartelazo, Mons. Romero fue consultado sobre el acontecimiento.

¿Por qué cayó la primera junta de gobierno? Los líderes civiles en el exilio afirman que los militares vetaban las reformas, impedían el entendimiento entre pueblo y FA. Señalan, además, que al entorpecimiento en la elaboración y promulgación de los decretos que luego se dieron en marzo de 1980, se agregaba una alta dosis de "represión" contra organizaciones populares que podían apoyar los cambios, si antes se les explicaba y se les daba tiempo de adaptarse a los modelos reformistas que la FA o una parte de ella buscaba llevar a la práctica. Sostienen, quienes renunciaron en masa en enero de 1980, que los comandantes militares pretendían mandar por encima de la propia junta que había asumido el poder ejecutivo, el legislativo y en la que recaía la Comandancia General de la FA.

La explicación está en que algunos jefes entendían el movimiento de una manera y otros creían que simplemente se trataba de un cambio de gobierno, un cambio de personas en la cúpula de la administración pública. Es evidente que el puente tendido a la oposición por parte de los golpistas de octubre sorprendió a la oligarquía. También sorprendió a los grupos revolucionarios

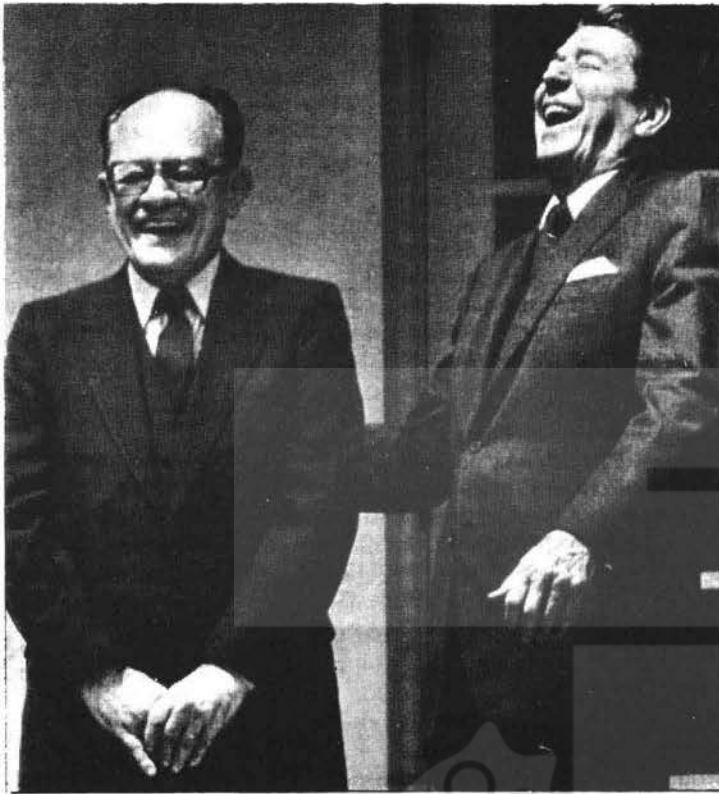
de masas y a los ejércitos insurgentes en formación. Los políticos de la UNO y del FORO POPULAR se hallaron en la junta entre la espada y la pared, sin el espacio necesario para imponer su propia concepción del cambio social. La llamada derechización de los altos mandos no era sino reflejo de las reacciones de grupos económicos y políticos contrarios a las transformaciones.

En varias oportunidades se ha manifestado por parte de elementos reformistas de la FA que la primera junta cayó por su propia ineficacia y su falta de voluntad política frente a la ultra derecha y la ultra izquierda. El tema debe ser objeto de mayor investigación y análisis, pues de ser así, es posible que las renunciaciones de enero fueran precipitadas o fruto de una eticidad reñida con la política real.

La reconstitución de la derecha contra el 15 de octubre comenzó a fines de 1979. Si habremos de calificar a la Democracia Cristiana como moderada en la izquierda o como moderada en la derecha, el pacto del 9 de enero de 1980 para salvar algo del golpe, no sólo fue acto de real política, sino audaz. La DC se quedó a jugar un papel histórico en la línea de apoyar a las fracciones militares que se pronunciaban por las reformas estructurales. Incapaz la DC de controlar la violencia gubernamental y para-militar, el precio por los cambios fue y es ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos y de haberse apartado de la base popular, que esperaba mayores definiciones del partido. Así la DC se ha movido del centro izquierda a la derecha, y aún hasta la extrema derecha, según las circunstancias y los eventuales pactos que ha hecho con grupos y partidos contrarios a su filosofía.

En el caso de las elecciones de marzo de 1982 cabe señalar que la convocatoria fue prematura. Las modalidades que revistió el proceso electoral y las cesiones que hizo la Junta Revolucionaria de Gobierno, constituyen un triunfo indiscutible de las derechas. Del gobierno de *facto*, reformista y pro-norteamericano, se pasaría a un gobierno preconstitucional que, supuestamente, ratificaría e impulsaría las reformas.

A lo largo de 1980 y 1981 la derecha salvadoreña hizo lo imposible para que la FA se deshiera de los demócratas cristianos y convocara a elecciones lo más pronto posible, en un sostenido intento por recapturar el poder político-militar. La restauración oligárquica significaba la paralización de las reformas económicas, arrebatando el gobierno a los militares reformistas por moderados que fuesen, y la construcción de una nueva



**El replanteamiento de la tesis electoral para fines de 1983, o principios de 1984, sin negociar un nuevo pacto social es otro error o una arma táctica de opinión para seguir la guerra.**

base social que permitiera una lucha frontal contra las izquierdas, cualesquiera fuese su naturaleza.

A fines de 1981 la derecha política había tomado cuerpo. Comenzaron a aparecer viejas y nuevas figuras representativas de los intereses oligárquicos. La bandera que esgrimían era el retorno a la constitucionalidad, al orden legal que siempre ha imperado a su favor, a la paz que ellos entienden como producto de un régimen de libre empresa, altamente estimulados y protegidos por un Estado social demócrata, desnaturalizado en sus instituciones financieras y de servicio.

Los demócrata cristianos erraron al creer que las reformas estaban aseguradas y que las elecciones se resolverían completamente a su favor. El error, en este caso, se llama 28 de marzo. Ese día las derechas tomaron la iniciativa política, en un país azotado por la violencia gubernamental y guerrillera, en un ambiente en que

el ciudadano común y corriente lo que pedía era paz, cese de la guerra, apertura de las fuentes de trabajo.

En todo caso, lo que interesa destacar es que durante este período la derecha y la extrema derecha salieron de sus casas residenciales y se presentaron en la televisión, la radio, y la prensa a plantear sus alternativas de solución a la crisis nacional.

Hay que indicar que la derecha, dividida en su seno, no planteó soluciones nacionales. Sus reivindicaciones eran de carácter gremial, empresarial, lo cual fue importante como reacción ante las tres reformas. La ASI, la ANEP, la Cámara de Comercio y la recién fundada Unidad Productiva enfocaron la crisis desde su propia perspectiva de clase dominante. El problema social, la miseria y marginalidad de los trabajadores urbanos y rurales, jamás fue abordado en ninguno de los pronunciamientos. Volvemos aquí a plantear un aspecto de fondo: la clase dominante, por el sólo

hecho de serlo, y la élite a su servicio están obligados a mantener niveles de tolerancia laboral, de suerte que no se produzca el desempleo, el hambre o cualquiera otra circunstancia que altere el orden social pactado.

Apelar a la frase de que todos los que trabajan por su cuenta son "empresarios", es un sofisma. Los grandes siempre se comen a los más chicos, y en el sistema nuestro esto es más que evidente. Nosotros esperábamos que la derecha, en su raíz y esencia capitalista, expondría por lo menos una tesis modernizante, capaz de generar confianza y credibilidad ante los trabajadores.

La oposición sistemática al programa reformista de la FA y de la Democracia Cristiana no era el mejor camino para reconocer los errores cometidos a lo largo de tantas décadas. Un apoyo condicionado a los cambios estructurales, de estimar las reformas como un seguro de vida, habría producido la negociación del poder económico en una nueva orientación y perspectiva.

El hecho es que la ausencia de un planteamiento serio sobre los problemas nacionales, y la mejor forma de superar las brechas sociales, no se produjo por parte de los habituales dirigentes del sector privado. A estas alturas no puede pensarse, únicamente, en la clase para sí. Hay que liquidar las contradicciones que se den al interior de la clase y fortalecer a la capa que mejor comprenda y asimile el cambio general de la sociedad. El peor error de las capas dominantes es aferrarse al pasado, a lo que fue, sin distinguir pragmáticamente que la clase en sí y para sí, sólo lo es en virtud de su eficacia y racionalidad en el sistema.

Una capa empresarial dinámica, enmarcada en los grandes ideales de la nación salvadoreña, dispuesta a sacrificar beneficios económicos en razón de la ética, la justicia y la racionalidad del sistema global, podría prosperar sin temor al levantamiento de las masas, o a la inseguridad e inestabilidad que genera el conflicto social, sobre todo cuando éste se expresa por medios político-militares.

Las elecciones, sin cambio fundamental en la estructura oligárquico-castrense, no constituyen punto de solución. Los sucesos ocurridos después del 28 de marzo de 1982 lo demuestran de manera inequívoca.

El resultado electoral del 28 de marzo, si bien esclareció las contradicciones políticas del bloque en el poder, pronto mostró su ineficacia al tener los partidos participantes que pactar una alianza obligada, inducida por la embajada de EE.UU., y bajo la presión de la FA. El 21 de abril en el Estado Mayor del ejército las organizaciones políticas ARENA, PDC, PCN, AD y PPS aceptaron elegir, en la Asamblea Constituyente a un presidente provisional "independiente", del agrado de los diplomáticos norteamericanos y de la total complacencia de los militares; en esa misma oportunidad se fijaron las bases de un régimen constitucional de excepción que permitiese la vigencia de la Constitución de 1962. El acuerdo trascendió las esferas oficiales y constituyó, desde entonces, el polo de sustentación de un poder inestable al interior del Estado y sus instituciones. El vacío de poder se reemplazaba con la mediación entre las partes heterogéneas.

El régimen constitucional de excepción, al "condicionar" las acciones del poder ejecutivo y del poder judicial mediante la ratificación de los nombramientos de los secretarios de Estado y de altos funcionarios, introdujo una modalidad parlamentaria ajena a la tradición política nacional. La Constituyente, instalada el 22 de abril de 1982, se arrogó el poder legislativo y limitó, en cierto modo, su propio tiempo específico para la redacción de la nueva Carta Magna.

El arreglo interpartidario que permitió el nombramiento del Dr. Alvaro Magaña como Presidente Provisional de la República trajo como consecuencia la creación de tres vicepresidencias en el poder ejecutivo, repartidas *ad hoc* entre ARENA, PCN y DC; la designación de ministros, alcaldes, gobernadores y otros cargos públicos fue repartida entre miembros de esos partidos, politizando y dividiendo el aparato gubernamental. Tal politización pronto se hizo sentir en las filas mismas de la FA, tanto a nivel de jefes como de cuadros medios. El hecho de que el Dr. Magaña "representase" de alguna manera a la institución castrense en el arreglo de abril, no impidió las opciones ideológicas de parte de algunos oficiales hacia los partidos, a la búsqueda de compartir a futuro la cuota de poder institucional ahora en manos de organizaciones civiles.

**Para crear condiciones de credibilidad al proceso de reformas más represión, Estados Unidos ha apelado a la fórmula electoral sin darse cuenta que mientras los cambios no sean institucionalizados, la estructura real de poder volverá una comedia la consulta electoral.**

Otra muestra de cómo las elecciones sin que haya transformaciones reales son fuente de fracaso, se observa en la paralización del proceso de reformas económicas planteado por el movimiento militar del 15 de octubre. Las negociaciones entre las fracciones de diputados constituyentes remiten a un modelo de gobierno incoherente, débil en la elaboración de leyes y decretos y propicio para la imposición de soluciones de grupos de presión, sean éstos internos o externos. La constituyente se ha desplazado de mayo de 1982 a mayo de 1983, de posiciones cerrada e inflexibles, a actitudes de "arreglo" y conveniencia con grupos sociales disímiles en intereses. El aprendizaje parlamentario se ha hecho en el peor momento de la historia nacional: esto es, en un momento de extremada polarización social e ideológica, guerra interna, deterioro económico y disolución social. El más perjudicado con este tipo de parlamentarismo y esta división y subdivisión del gobierno central y municipal es el país, pues todos los proyectos de desarrollo gubernamental se han estancado, a menudo por fricciones de los titulares de los diferentes ramos o ministerios. El partidarismo ha echado raíces en las diferentes dependencias oficiales, contribuyendo a una dispersión que en buena medida refleja la polarización general de la sociedad. Quizá sólo la acción militar (el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor) ha seguido un curso uniforme, discutible y probablemente no exitoso, pero enmarcado en la defensa del actual Estado en su totalidad.

Fenómeno no menos interesante han sido las divisiones en la dirigencia y base de los mismos partidos que concurren a las elecciones de marzo de 1982. El PCN se ha escindido en tres: el nuevo PCN al frente del cual asoma una tendencia centrista, PAISA de orientación centro derecha definida y MERECECEN con aspiraciones neo populistas no muy claras en el contexto nacional. El Partido Demócrata Cristiano que en los primeros meses de 1982 estuvo a la defensiva de ARENA y del PPS, sigue la línea norteamericana de reformas y represión, con matices respecto a la solución política global; dos tendencias se visualizan en su seno: **duartismo** (seguidores de Duarte) y **fidelismo** (seguidores de Fidel Chávez Mena). ARENA, cuyo principal líder sigue siendo el mayor Roberto D'Aubuisson, ha perdido el apoyo de grupos económicos que confiaban en soluciones radicales de derecha y que a lo largo del año han advertido que el partido ha transado, bajo presiones que consideran inaceptables.

ARENA no representa ya una buena inversión para los sectores conservadores. Acción Democrática está dividido en dos alas: los liberales que aspiran a una restauración del capitalismo agrario, sin cambios sociales, y los neoliberales que buscan una aproximación a un intervencionismo estatal moderado, pero necesario para la democracia social, y, en consecuencia, decididos a aceptar las reformas que el sistema requiere. En ese definirse y redefinirse, los partidos que están en la Constituyente, reflejan la crisis política nacional, en grado bastante alto.

De los logros del periodo 1982/1983 está sin duda el llamado Pacto de Apaneca, el único documento de importancia surgido de las alianzas interpartidarias, que puede servir de base para explicar el programa de gobierno de "unidad nacional" en torno al presidente de "compromiso", Dr. Alvaro Magaña.

El Pacto de Apaneca, por cierto repudiado por AD, propuso adoptar una plataforma básica de gobierno, de acuerdo a los siguientes objetivos: a) pacificación; b) democratización; c) derechos humanos; d) recuperación económica; e) reformas; f) confianza y seguridad; y g) fortalecimiento internacional.

Suscrito el 3 de agosto de 1982 por los partidos mayoritarios PCN, PDC y ARENA y apoyado por el PPS, el pacto ha arribado con algunos problemas de operativización a las metas propuestas: gobierno de equilibrio a base de reparto de cargos públicos; mantenimiento de la situación pre-constitucional, tal como se pactó el 21 de abril; apuntalamiento de una política de pacificación, democratización y reactivación económica, sin resultados positivos; nombramiento de las comisiones política, de derechos humanos y de paz que hasta la fecha, a excepción de la primera, no han logrado cuajar por la falta de condiciones sociales adecuadas, así también por la falta de definición y autoridad pública de sus miembros. Su inoperancia es penosa ante la crisis general.

En resumen, las elecciones sin cambio en la estructura de poder, no abordan el problema de fondo. El cuestionamiento del bloque en el poder (clase dominante y subordinada) por la clase dominada (proletariado rural y urbano) no está previsto en la solución partidaria, en tanto el resultado no modifica las relaciones existentes en la formación económica y social, ni crea nuevas posibilidades pacíficas de acceso a grupos y sectores emergentes que propugnan política y militarmente por nuevas formas de poder.



El replanteamiento de la tesis electoral para fines de 1983, o principios de 1984, sin negociar un nuevo pacto social es otro error o una arma táctica de opinión para seguir la guerra. Y hay que aceptarlo así, como una maniobra para no llamar a engaño a nadie.

#### 4. Posición del FDR/FMLN: negociaciones más elecciones

Desde junio de 1981 el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) plantearon a la Junta Revolucionaria de Gobierno la vía del diálogo y las negociaciones para hallar, de común acuerdo, una salida política al problema de las reformas, la democratización, la pacificación y las elecciones.

Un documento del FDR dirigido al FMLN fue hallado por las autoridades de seguridad; en él se planteaba el diálogo como una estrategia para ganar tiempo político en beneficio de la guerra de guerrillas. El conocimiento de tal memorandum de fecha 3 de febrero de 1981 fue explotado por la derecha al interior del ejército en forma exitosa. Se descubría que tras la propuesta de negociación no había sino una maniobra, tendiente a prolongar el conflicto militar.

Se deduce que, a esas alturas del proceso, no había unidad en la izquierda armada respecto a un diálogo para resolver las diferencias de fondo con la DC, la FA y los propios EE.UU., que patrocinan el proyecto de cambios en El Salvador. El Frente Democrático Revolucionario conformado por el social demócrata MNR, el Movimiento Social Cristiano y el Movimiento de Profesionales y Técnicos Independientes (MIPTES) se veía en la necesidad de "convencer" al FMLN de entrar en conversaciones, sin duda alguna para ganar para sí un espacio político en el país y en el extranjero.

Ha sido y es difícil para el FDR, dada su especificidad democrática no armada, mantener una alianza estratégica con el FMLN. En tanto el FDR es un organismo político, muy vinculado a la Internacional Socialista con sede en Londres y a la Internacional Demócrata Cristiana, el FMLN está estructurado en base a alianzas de grupos insurgentes bastante radicales y cuya ma-

yor fuerza reside en el componente militar no institucional. Es sorprendente observar cómo entre el FDR y el FMLN se ha consolidado la unidad, en apoyo a un plan y un programa de gobierno democrático-revolucionario. La sorpresa no está en que se produzca un pacto entre fuerzas ideológicas y políticas adversas, filosóficamente antagónicas, sino en haber logrado niveles de cohesión que hasta este momento parecen coincidir en lo fundamental: liquidar el poder oligárquico e instaurar en su lugar un régimen democrático-popular, abierto al pluralismo, que afirme la autodeterminación del pueblo salvadoreño.

Gabriel Zaid en su trabajo "Enemigos coaligados" muestra lo complejo de la unidad misma del FMLN, la forma cómo los distintos grupos de izquierda armada han superado divergencias, la depuración de líneas tácticas y estratégicas en un espectro que va de la guerra popular prolongada, a la guerra popular patriótica, y a la liberación democrático-popular, según los distintos enfoques de la unidad concertada. El mismo Partido Comunista de El Salvador (PC), que antes de 1980 era contrario a la tesis de la guerrilla, y de donde salieron los principales líderes del ERP, FARN, FPL, ha concurrido al pacto en la seguridad de que están cerradas, por el momento, las vías electorales.

Para muchas personas, incluso elementos ilustrados de la clase dominante y de las capas gerenciales, el FDR y el FMLN son la misma cosa. Hay que explicar que ello no es así. El FDR tiene su propia identidad político-democrática. Igual sucede con el FMLN que es la alianza de varios grupos político-militares de izquierda revolucionaria, a cuyo interior se dan distintas visiones del problema y, naturalmente, diferentes formas o alternativas de encarar los hechos de la guerra y la paz.

Interesa destacar que en el período que estudiamos (1982-1983) la unidad del FMLN es mayor que la que se dio en los años de 1980 y 1981. Igual sucede con el FDR, en tanto hay mayor consistencia y ubicación en el proceso de parte de sus líderes. Nos parece, a grosso modo, que el FMLN se ha "democratizado" al contacto con el FDR y que el FDR se ha "radicalizado" en la alianza con aquél. De obtener ambos grupos el poder es posible que vuelvan las divisiones, pero

**El aprendizaje parlamentario se ha hecho en el peor momento de la historia del país. El más perjudicado con este tipo de parlamentarismo, donde el partidismo ha echado sus raíces, es El Salvador.**



## **Las clases dominantes han olvidado que el ejercicio del poder legítimo requiere más que de los fusiles, de la soberanía popular libremente ejercida.**

ello pertenece al futuro y no a la historia que analizamos.

El planteamiento de elecciones libres, hechos por la Junta Revolucionaria de Gobierno, no cambió en absoluto la línea político-militar adoptada por el FDR y el FMLN. Ambos sectores rechazaron la propuesta de abandonar las armas, acogerse a la amnistía y presentarse a los comicios en busca de diputaciones. El MNR, partido legal en la alianza primaria del FDR, señaló en documento del 5 de noviembre de 1981 que: "La Junta militar democristiana llama a elecciones en un momento de confrontación político-militar, en instantes en que el conflicto arroja más de 30,000 muertos por causas políticas, y en el cual hay 280 mil refugiados o desplazados de sus respectivas zonas de trabajo, víctimas de los enfrentamientos militares y en demanda de una solución que ponga fin a la tragedia que vivimos... No rechazamos las elecciones en sí mismas, si no las "elecciones libres" que el actual gobierno trata de imponer por la fuerza, "bajo las balas" como afirmó uno de sus altos representantes. Son estas elecciones concretas las que denunciamos desde ya como un fraude y un engaño a la buena fe de nuestros compatriotas. Así, es en este marco de violencia estructural, sin cambios sustantivos en los cuadros de mando del ejército, constreñido el país entero por decretos

autoritarios y bajo Estado de Sitio y la amenaza permanente de cuerpos para-militares que hace apenas un año mataron a Monseñor Romero y a nuestros compañeros del Frente Democrático Revolucionario. **No vamos a elecciones... No vamos a elecciones sin una negociación previa de condiciones sociales y políticas.** Esa es nuestra posición en la hora actual. Así nos definimos ante el simplismo de quienes ven en los comicios, por sí solos, la solución al grave deterioro de valores de la sociedad salvadoreña..."

El UDN no se pronunció, pero nadie ignora que sus dirigentes son miembros importantes de las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y en consecuencia con voz y voto dentro de los organismos decisorios del FMLN. Es en este nivel, FMLN, donde se dió con mayor énfasis el rechazo a la fórmula electoral.

La tesis de la negociación ha cobrado brillo en reiteradas ocasiones. En documentos del 5 de octubre de 1982 se ofertó el arreglo por partes del FDR/FMLN. Los puntos básicos, en esta oportunidad, se concretaron así:

**"1.- Que el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por una parte, y por la otra, el poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente y las Fuerzas Armadas de El Salvador, iniciemos prontamente un diálogo directo**



sin condiciones previas orientadas a encontrar caminos que conduzcan al establecimiento de la paz y la justicia social en El Salvador y que contribuya a distender la región centroamericana.

"2.- Que ambas partes designemos delegados plenipotenciarios para el efecto apuntado.

"3.- Que se integre un grupo de Buenos Oficios que organice y posibilite el diálogo y ponga en comunicación a los delegados de las partes, para que, conjuntamente, determinen y acuerden los asuntos relativos al procedimiento de inicio y desarrollo del diálogo.

"4.- Que ambas partes, junto con el grupo de Buenos Oficios, realicen un examen de las formas de participación en el diálogo de otros sectores nacionales, entre los que mencionamos los siguientes: partidos políticos, organizaciones laborales (obreras y campesinas), asociaciones de empresarios privados, sectores eclesiásticos, universidades, colegios profesionales y otros sectores gremiales interesados en aportar su valiosa contribución en la solución del conflicto salvadoreño.

"5.- Como muestra de buena voluntad y seriedad mutuas, y, para arribar a resultados positivos, el diálogo se realice con la presencia de testigos solventes. Estos testigos podrán ser na-

cionales o extranjeros, según lo convengamos ambas partes."

Explicitamente y por medio de la declaración franco-mexicana los insurgentes dijeron estar listos para llegar a un entendimiento político, incluyendo la participación en elecciones, siempre y cuando la estructura de poder oligárquico-castrense fuese modificada en su plataforma actual.

El gobierno militar democrata cristiano fijó su tesis de "elecciones, más guerra" el 15 de septiembre de 1981. El FDR/FMLN, declaró la suya de "negociaciones más elecciones" el 15 de octubre de ese mismo año, aunque cabe agregar a esta última postura la continuación de hostilidades y de desgaste del sistema económico y político imperante en El Salvador. Las conversaciones privadas, oficiosas, sobre el arreglo de la cuestión salvadoreña han ocupado muchas horas de políticos latinoamericanos, europeos, y norteamericanos. Los más interesados han sido, en Centroamérica, el Gral. Omar Torrijos (muerto en accidente aéreo) y el ex-presidente de Costa Rica, Daniel Oduber. De Venezuela, el líder social demócrata Carlos Andrés Pérez y, últimamente, el Presidente Carlos Herrera Campins. De México, el ex-presidente José López Portillo y el jefe del actual gobierno de ese país, Miguel

de la Madrid. En EE.UU., los políticos Dodd, Solarz, Studds, Lynch, Kennedy han expresado los deseos de una salida política, no militar. En Europa ha sido casi unánime la postura de diálogo por parte de Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania Federal y otros aliados de EE.UU., en la órbita occidental. España ha sido clara, a partir del gobierno de Felipe González, en buscar una mediación. Canadá, en ese sentido, también ha jugado y juega un papel clave dentro de la tesis de la negociación política. Ultimamente Colombia ha encabezado un movimiento pro-paz en Centroamérica. El grupo Contadora representa el esfuerzo más coherente del grupo latinoamericano en busca de una solución política a la crisis de El Salvador y Nicaragua.

Los partidos de la Internacional Socialista y la mayoría de los pertenecientes a la Unión Mundial Demócrata Cristiana, han optado por la fórmula reconciliadora, no obstante los matices que en cada país adquieren las dos tendencias occidentales.

En 1981 y principios de 1982 la tesis insurgente de negociaciones primero y elecciones después, logró despliegue en el exterior y poca difusión e impacto en El Salvador. Hastiado el pueblo de la guerra, cansado en todos los sentidos, la propuesta electoral tuvo buena acogida en numerosos sectores. El entusiasmo mayor se sintió en la clase media, en el proletariado urbano y semi-urbano, que visualizaron las elecciones como el principio del fin de la tragedia que vive el país.

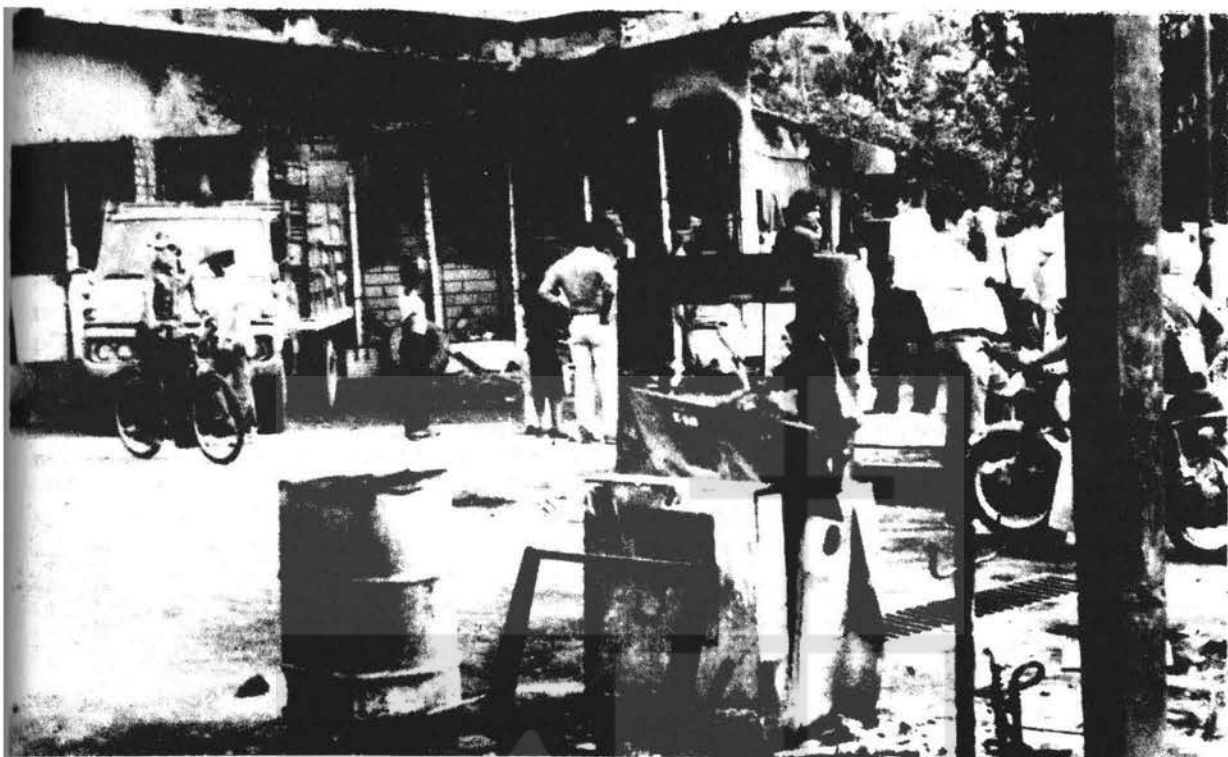
La salida electoral en sí misma no era despreciable, en tanto suponía una apertura política hacia los sectores que cuestionaban a la Junta Revolucionaria de Gobierno y buscaban un nuevo equilibrio de poder, sea que el consenso le diera mandato superior al grupo al frente del gobierno, o bien lo desplazara en provecho de sus opositores de la ultra derecha. Se deseaba saber cómo percibía el pueblo el programa reformista, si lo apoyaba o rechazaba.

El fenómeno, a estudiar dentro de lo limitante que son las elecciones en un clima de represión gubernamental y de guerra insurreccional, evidencia las divisiones internas de la sociedad. La falta de cohesión de los salvadoreños no puede verse en forma aislada, sino dentro de un contexto de angustia y agonía, en que importa más la paz social que la ideología que se ofrece como salvación. El salvadoreño vive en tal grado de supervivencia, de lucha diaria por el sustento,

que realmente no le interesa determinar quién debe hegemonizar al interior del Estado. El grado de conciencia que hay en los salvadoreños respecto a su capacidad de ejercicio de la soberanía es alto. La verificación histórica enseña que nunca ha habido elecciones libres, tal vez como excepción en 1931, y no había por qué confiar tanto en el 28 de marzo de 1982 como para cambiar de golpe, o esperar que entonces "si habrían comicios honestos". Las elecciones, en otros momentos, habían servido para resolver las diferencias inter-clase. Era posible, y en ello se empeñaba la palabra del ejército y el gobierno norteamericano, de que "los votos aun bajo las balas" trajesen la paz. Al ciudadano común y corriente no le importaba tanto la pureza del sufragio, le importaba poner fin al conflicto lo más pronto posible. Esa es nuestra opinión.

Hay que añadir que el momento actual no es similar a las expresiones de crisis anteriores (1945, 1950, 1956, 1961, 1972). Ahora hay una crisis de hegemonía de la clase dominante y por lo mismo, las elecciones por sí solas no pueden resolver el problema. Tiene que haber un desplazamiento de fuerzas sociales al interior de la sociedad y el Estado. Deben liquidarse formas de dominación que riñen con el nivel de crecimiento de la aspiración de las clases populares. La reeducción, la composición del nuevo poder es el elemento principal de este momento histórico. La apelación a los votos pueden venir luego cuando la disputa por el poder se haya canalizado por medio de mecanismos y medios no violentos. Si es cierta la frase de Mao de que el poder nace del fusil, lo es tan sólo en el sentido de referirse al nacimiento u origen del poder. La consolidación, la afirmación, la estabilidad de todo poder legítimo, requiere más que de los fusiles, de la soberanía popular libremente ejercida. De ahí la necesidad del consenso para gobernar con el pueblo, para y desde el pueblo. Esto último es lo que han olvidado las clases dominantes del país.

Si las clases dominantes no hubiesen perdido el liderazgo, entendido éste como responsabilidad frente a los problemas concretos del hambre, el desempleo, la vivienda, la educación y la salud de los habitantes, la crisis no se habría producido. Y las nuevas ideologías apenas si habrían aglutinado a unos cientos. Si se medita en esto, sin malicia alguna, el sector dominante y la élite a su servicio aclararían muchos equívocos, falacias y equivocaciones peligrosas. Si se parte de hechos falsos, de conceptualizaciones erróneas, es lógico



que se arrije a posiciones y toma de decisiones equivocadas. No estudiar la crisis, de manera científica, es actuar de espaldas a la realidad. Es caer en la tentación de echar la culpa de lo que pasa a la "subversión internacional", nombre general e inespecífico que sirve para todo, menos para salir del callejón en que nos encontramos. Hay subversión internacional y hay terrorismo internacional, pero hay fundamentalmente injusticia social, institucional, que es la raíz del conflicto. Mientras ésta no se combata eficazmente, la otra, la externa seguirá creciendo a expensas de la raíz salvadoreña del conflicto.

La clase dominante del país y sus servidores, sean civiles o militares, son los primeros responsables de lo que pasa en El Salvador. Tanto en la esfera privada como en la pública, el país ha venido arrastrando una pesada hipoteca de subdesarrollo, de atraso, de miseria y de marginalidad, sin que los grandes empresarios y los gobiernos hallan puesto un verdadero esfuerzo por cambiar las cosas, por transformarlas, por modernizarlas, por humanizarlas.

El capitalismo que no es el mejor sistema económico, en razón de sus crisis periódicas y en razón de la injusticia que genera, no es en El Sal-

vador ni siquiera un "capitalismo" aceptable a la norteamericana o a la europea. Es un capitalismo primitivo, en el marco de una economía de plantación que se sustenta de mano de obra barata, casi esclava. No liquidar lo que tiene de feudal nuestro sistema económico, es reconocer carta ética a la clase dominada para que se levante contra la injusticia institucionalizada.

Hay que entender que la izquierda armada, en razón de pugnar por formas diversas de socialismo, no puede aceptar la actual estructura de poder oligárquico-castrense, ni mucho menos transar la revolución en curso por unas elecciones que, de una u otra manera, llevarían a fortalecer a la derecha contraria a los cambios.

Cuando el FDR dijo no a las elecciones, dijo no a esas elecciones específicas del 28 de marzo. Cualquier observador político sabe que los social-demócratas y los social-cristianos aceptarían ir a las elecciones si objetivamente se consolidan las reformas estructurales, y se abren espacios reales para la democracia representativa, plural y popular. El no del FDR tiene su explicación histórica. Los partidos y los líderes que lo integran ha padecido el fraude, han ganado las elecciones y no les han entregado el poder.

En cuanto al no de la guerrilla, es decir del FMLN, es un no contundente al sistema económico, social y político. Su proyecto va más allá del impuesto por la Democracia Cristiana y la FA, a partir de marzo de 1980. El FMLN tiene capacidad de veto en las actuales circunstancias y como fuerza real, no puede desconocerse su papel y su importancia en los acontecimientos.

Unidos el FDR/FMLN constituyen dos vertientes: una, democrática y, otra, revolucionaria, ambas no aceptaron las elecciones de marzo, tal cual se presentaron. De ahí su decisión de ignorar el proceso electoral, en la seguridad de que la táctica y la estrategia que emplean en la guerra a largo plazo afectará en alto grado la correlación de fuerzas internas.

Desconocemos los documentos del FDR/FMLN sobre las elecciones de marzo de 1982, aunque no hay duda que los resultados de los comicios obligaron a sus dirigentes a replanteamientos en la línea de buscar el diálogo, una negociación, en términos pragmáticos con la FA y los partidos que emergieron para la campaña de 1982.

Hay que concluir que tanto las **elecciones** esgrimidas por el gobierno como las **negociaciones** ofertadas por las guerrillas son armas políticas de la contienda, las dos tienen el propósito común de ganar tiempo para la guerra que define el conflicto en su expresión real. El FDR/FMLN ha dicho, en junio de 1983, no a las elecciones que el gobierno presenta como principio de solución. El no de la oposición política y armada en un sí categórico a la guerra.

## 5. La guerra civil elemento determinante del proceso

Creemos que la guerra que vive el país es el elemento de mayor peso de la contienda. No son las elecciones ni los partidos políticos los agentes del conflicto, estos apenas si expresan las contradicciones inter-clase, apenas si reflejan las condiciones de atraso ideológico, de inmadurez en la dirigencia de los grupos organizados y el poco arrastre en las bases. En tanto para el pueblo votar es una muestra de adhesión a la democracia, a la paz con justicia, a la libertad, para muchos políticos es sólo un mecanismo de acceder al gobierno por la vía de la propaganda, la demagogia y la instrumentalización de los órganos masivos de comunicación. Los votantes, las masas, están a mucha distancia de los conductores, en cuanto a patriotismo y ejercicio cívico se refiere.

La guerra que sostiene la FA y el FMLN es lo principal que hay que resaltar del período que nos ocupa. En primer lugar, la lucha armada ha invadido todos los campos de la actividad nacional. No hay un sólo sector o capa social que no haya sufrido el impacto de la guerra, sea en el orden económico, en el social, en el moral, en el educativo, en el religioso, la guerra es el escenario mismo del presente y del futuro del país.

Los salvadoreños, tras estos años de lucha fratricida, hemos cambiado. No somos ya los mismos. La violencia deja huellas muy hondas en la conciencia social: la pedagogía de los métodos de muerte y destrucción se hacen sentir en niños, jóvenes y ancianos. Si los daños materiales son al-



tos, mayores quizá a los 80 mil millones de colones, los daños psicológicos son invaluable.

Más de 50 mil salvadoreños han muerto por motivos políticos de 1977 a 1982. Y siguen muriendo en enfrentamientos, emboscadas, bombardeos. El ejército que en 1970 tenía once mil hombres enrolados, ahora tiene 35 mil, más los que forman parte de la defensa civil.

La guerrilla que se inició en 1970 con unas quince personas, la mayoría obreros e intelectuales de la pequeña burguesía, ahora se desplaza por el oriente y norte del país con más de nueve mil combatientes, sin contar entre ellos a los cuadros urbanos en la clase obrera y núcleos de la pequeña burguesía, que ha sido obligada a tomar una opción frente a la espiral de violencia.

A estas alturas del proceso, el investigador social se pregunta: ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué se vuelve inviable el acercamiento, el simple diálogo entre la FA que sustenta parte de los valores del sistema, y el FMLN que proclama y hace suyos los imperativos de una revolución democrático-popular? ¿Son tan opuestos los esquemas de cambio de ambas partes o hay de por medio factores internos y externos que se oponen radicalmente a la solución mediada, negociada? Si ello es así, ¿qué factores son éstos, tan fuertes, que impiden el diálogo racional y favorecen la guerra, como principal salida al conflicto.

¿Será la solución militar, para ambas partes, la única razonable? ¿Será la paz del vencedor, árbitro final, la que necesita El Salvador? Pues si es así, hay que darle a la guerra todo el énfasis necesario, tanto de parte de la FA como de la guerrilla. Urge que una de las partes se imponga plenamente, sin regateos, de manera que si la guerra se hace para ganar la paz, la guerra termine lo más pronto posible. No puede permitirse el país una guerra larga, penosa, cruenta, cuyos resultados finales no se hayan estudiado a la luz de la necesidad misma de los salvadoreños. Si al final de la guerra, el vencedor resulta dueño de una catástrofe mayor, pues esa será la suerte de la nación. Este dilema recuerda de inmediato a Pirro que ganó sobre los cadáveres y los escombros, cuestión que no es remoto que ocurra aquí, si no se valora la guerra en términos reales, prácticos y patrióticos. La responsabilidad de esta salida, tan privilegiada por algunos grupos económicos y políticos, será de la FA y del mismo FMLN. De ellos, como polos sustentadores de opciones diferentes, y de nadie más.

El hecho de que la guerra gastada a lo largo de 1970 a 1979, se haya virtualmente potenciado

en los últimos cuatro años, indica que el conflicto social y político se ha interiorizado a todos los aparatos del Estado. De ahí que el país entero esté involucrado, directa e indirectamente, en el problema. El gobierno opera con una economía de y para la guerra, aumentando el presupuesto destinado a la compra de armamento a EE.UU.

De 1979 a 1983 los fondos destinados a la FA fueron de alrededor de mil setenta y ocho millones de colones, más mil cien millones de dólares de ayuda externa, provenientes del suministrante y aliado principal: la Administración Reagan que, cada vez más, interviene en el conflicto armado. EE.UU. no parece darse cuenta que, en esta línea, en poco tiempo habrá regionalizado las soluciones militares en Centroamérica. Las experiencias en Asia y África tienden a repetirse, generando condiciones favorables para una guerra a escala en la región. No puede descartarse el envío de tropas norteamericanas si la polarización política se agudiza y si las guerrillas del área no son derrotadas en el terreno militar. La "seguridad nacional" será invocada, caso las revoluciones triunfen o, por lo menos, desestabilicen la región.

Elemento a considerar en la bipolaridad de la guerra fría, es la "seguridad nacional", ideología dominante cuestionada por otras doctrinas. La desmitificación de la democracia formal que hemos vivido es un hecho palpable. La democracia liberal se ha derrumbado, y con ella las instituciones que parecían inmovibles. Los conceptos de patria, libertad, justicia, ciudadanía, autodeterminación, soberanía, poder, voto y fraude, han sufrido un esclarecimiento a nivel de la conciencia de todos. Aunque la confusión ideológica impere, debido a tanto engaño, los salvadoreños sabemos a que atenernos cuando los políticos hablan desde sus tribunas. Ha llegado a tal grado la desmitificación de la ideología, que cuando se deciden cuestiones torales como son la de la paz y la guerra, el ciudadano de todos los estratos sabe dónde y quién está decidiendo por él. La clase dominante, articulada a los centros hegemónicos del capitalismo, no ha podido armonizar sus intereses con las aspiraciones e inquietudes de las masas proletarias. La dependencia económica se traduce ahora, más que nunca, en una dependencia política y militar. La autonomía relativa que mantienen burguesías tales como la venezolana, argentina, brasileña y mexicana, en El Salvador se ha perdido. Las decisiones se toman descaradamente en Washington, sin mediar el consentimiento de las clases



dominantes del país y sin tomar en cuenta a las élites, en un tutelaje reformista aparentemente a favor de las mayorías oprimidas. El vacío de poder de la clase dominante atrofiada, sin nacionalidad, muestra la crisis real del sistema económico y político.

En los actuales momentos se corre el riesgo de una extremada ideologización, especialmente por los insurgentes. Si la nueva ideología es una base importante para cualquier proyecto político, no lo es todo, especialmente si a nombre de ella triunfa el dogmatismo, el fanatismo, la absolutización de un esquema político. El peligro para las masas que luchan por reivindicaciones concretas está en que la ideología, muchas veces,

es traída de fuera e impuesta como una panacea, sin darse cuenta cabal de que el desarrollo material y de conciencia social de nuestro país no va parejo con el ideal filosófico enarbolado. La copia de modelos externos, la implantación de tácticas y estrategias empleadas en otras latitudes no corresponden a nuestra realidad, y el movimiento revolucionario corre la suerte de fracasar por condiciones objetivas que no son valoradas en su dimensión específica.

Otra cuestión, no menos importante, relacionada con la ideologización es su dependencia de factores externos. Así, el bloque en el poder acude a la fuente generadora del sistema y obtiene el apoyo político y militar para la falsa democracia y la nula justicia, a nombre de la cual se gobierna. El bloque opositor, insurgente, hace lo mismo. Busca y halla el apoyo internacional para el nuevo proyecto histórico. De ahí que, de estas relaciones ideológicas, el paso a la regionalización del conflicto sea fácil y se preste al juego político-militar de las grandes potencias. El replanteamiento de la guerra fría, el balance de poder mundial se hace a costa de pequeñas guerras que dejan a los pueblos en la miseria, quebrada su voluntad soberana, y expuestos a arreglos en el ajedrez de la política mundial.

## 6. El Salvador, una cuestión de orden mundial

El problema salvadoreño ha adquirido características militares insospechables. Ya no se trata de una rebelión, de una simple insurrección interna, de una subversión de valores e instituciones. Es eso y es algo más. En la correlación de fuerzas internacionales, El Salvador y Nicaragua, cuentan frente al problema Cuba/EEUU y cuenta también en las tensiones de EEUU/URSS.

Aclaremos que la raíz y la solución de la crisis corresponde únicamente a los salvadoreños, pero al intervenir franca y abiertamente EE.UU., a favor de un sector, genera la reacción interna del bloque revolucionario y desde luego de partidos y gobiernos que ven la oportunidad de poner su peso en contra de EE.UU. En el caso salvadoreño, el apoyo a los insurgentes viene de los países socialistas y de países aliados de los norteamericanos, tan importantes como son las naciones nórdicas (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega) o de Europa como Francia, Holanda, España, Alemania Federal. El grupo de no alineados, que está por los movimientos naciona-



les de liberación, tiene un escenario para desafiar al neocolonialismo y al poder imperial de las potencias superdesarrolladas.

Ya no se puede ocultar que la guerra en El Salvador representa una cuestión de seguridad para los intereses de EE.UU., en el continente y una cuestión de supervivencia para la misma revolución nicaragüense.

La internacionalización de la guerra en El Salvador es producto de errores garrafales del Departamento de Estado, sobre todo del equipo de asesores del Presidente Reagan, que de una revolución nacional anti-oligárquica han hecho un drama. El movimiento insurgente tiene muchas décadas de venir gestándose. Su origen, nunca será bastante repetirlo, hay que buscarlo en la injusticia institucionalizada, en la militarización de la sociedad cada vez menos civil, en la negación de los derechos civiles y políticos, y en prácticas y métodos totalitarios. Es un hecho indiscutible que las élites contestarias al sistema y las masas organizadas en partidos políticos, sindicatos, gremios y asociaciones comunitarias han sido siempre objeto de represiones brutales, para ahogar los brotes de inconformidad. En 1981, cuando se reconoció por parte de la FA y de todos los conservadores que El Salvador no había tenido elecciones libres en toda su historia, se hizo palpable al menos una verdad: la democracia liberal es un fraude nacional, la soberanía popular un engaño, desgraciadamente secular.



Hay que preguntarse ¿por qué no se respeta la voluntad popular? Y la respuesta, en su complejidad, es sencilla: la estructura de poder oligárquico-castrense lo ha impedido. Uno de los motivos, no el único, es la verificación histórica de las masas de no poder acceder al gobierno por la vía de las elecciones. Los votos en El Salvador no cuentan, y en muchas ocasiones, sólo se contaron para imponer a gobiernos autócratas, tanto civiles como militares.

Defender al grupo hegemónico, en el bloque de poder del Estado, es olvidar las injusticias en el orden social y económico y no entender que las organizaciones populares se han armado, se han insurreccionado, por el cierre y la exclusión política. El FMLN es el resultado de una serie de alianzas de pequeños ejércitos, nacidos de la inconformidad frente a la clase dominante. Creer que la Unión Soviética llamó a los comunistas y les dijo hagan la guerra es una barbaridad. Si los marxistas no llaman a la insurrección, lo hubieran hecho los social-demócratas o los social-cristianos. Y si éstos no la encabezan, el proletariado habría tomado las armas. Hay que conocer las condiciones internas para valorar los acontecimientos, en particular de 1960 a 1983.

De una crisis de hegemonía de la clase dominante, los EE.UU., han pasado a convertir el suelo salvadoreño en un campo de batalla, llamando la atención de todos los pueblos del mundo y consolidando ayudas al FMLN que no se hubieran producido si no vieran en el caso de El Salvador un problema de ética y de justicia.

Nuestra tesis principal está en que fue un error del ex-Secretario de Estado Alexander Haig y de Jeanne Kirpatrick traer la confrontación Este/Oeste a Centroamérica y darle dimensiones que lejos de solventar el problema, lo agravaron, lo agrandaron. Olvidaron que la situación salvadoreña es parte de la cuestión Norte/Sur.

En verdad es difícil salir de la situación de guerra, mientras Estados Unidos continúe enviando armamento a El Salvador y a Honduras, ante las expectativas de lo que ocurra en Nicaragua. Por ese camino militar, es lógico suponer que los salvadoreños alzados en armas recibirán más y más ayuda de los aliados ideológicos de muchas partes del mundo. Y que Nicaragua, en un *reprise* de lo que pasó en Cuba en los años 1959-1962, será obligada a fortalecer sus lazos con la Unión Soviética, desencadenando una lucha mayor de la que actualmente se libra en suelo centroamericano.

La guerra entre la FA de El Salvador y el FMLN constituye el punto principal del momento político de Centroamérica. No son las elecciones, ni las débiles y frágiles alianzas de las derechas, las que definen la situación. En tanto la FA no derrote al FMLN, éste tiene capacidad de objetar al gobierno establecido y opinar sobre las reformas económicas y sociales y tiene, lo que es más importante, la posibilidad de desestabilizar al régimen en lo que algunos politólogos han llamado equilibrio inestable, impasse, empate, quiebre estructural e institucional del Estado de El Salvador.

Para quienes estamos en contra de la guerra, de su prolongación, de su ampliación, es motivo de preocupación observar la insensibilidad frente al fenómeno, la falta de imaginación y creatividad de los líderes, tanto del gobierno como de la oposición armada, en la búsqueda de una solución política racional. Creemos que todavía es tiempo de hallar alternativas posibles y distintas.

10. de Junio de 1983.

